

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO 9° ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Referencia: 110013335 009 **2019 00189 00**
Demandante: José Wilmar Gómez Franco
Demandado: Policía Nacional

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

(Deniega medida provisional)

El Despacho procede a resolver la solicitud de suspensión provisional de los fallos proferidos en procesos disciplinarios, de primera y segunda instancia, por la Policía Nacional, y la Resolución 2891 del 06 de junio de 2018, que ejecutó la sanción impuesta.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda¹

1.1. El actor formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó que suspendiera provisionalmente los fallos disciplinarios de **primera instancia del 21 de junio de 2017 y de segunda instancia del 16 de mayo de 2018**, ambos proferidos por la Policía Nacional, y la **Resolución 2891 del 06 de junio de 2018** que ejecutó la sanción impuesta.

1.2. Narró como **hechos** los siguientes:

1.2.1. El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno DIPON, mediante fallo disciplinario de primera instancia del 21 de junio de 2017, dentro del proceso disciplinario DIPON-2016-145, destituyó e inhabilitó al señor Intendente José Wilmar Gómez Franco por el término de 10 años (fls.44 a 189 c.1).

¹ Folios 1 a 23 del cuaderno 1.

1.2.2. El Inspector Delegado Especial ante la Dirección General de la Policía Nacional, mediante fallo disciplinario de segunda instancia del 16 de mayo de 2018 confirmó la decisión del 21 de junio de 2017 que declaró responsable disciplinariamente actor, imponiéndole el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años (fls.148 a 226 c.1).

1.2.3. La Policía Nacional, mediante la Resolución 2891 del 06 de junio de 2018, ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al demandante (fl.209 c.1).

2. Medida cautelar de urgencia²

2.1. Con el escrito de la demanda, el actor solicitó medida cautelar de urgencia a fin de suspender provisionalmente los actos administrativos demandados que lo retiraron del servicio activo.

2.2. Lo anterior, lo fundamentó en razón a que los actos administrativos proferidos por la entidad demandada fueron, según él, ilegales. Así mismo, manifestó causársele un perjuicio irremediable si se mantiene la decisión, debido a que es padre cabeza de familia, no tener dinero para sostener el núcleo familiar e imposibilidad de conseguir empleo (fls.1 a 5 c.2).

3. Trámite procesal

3.1. En la providencia del 13 de mayo de 2019, este Despacho avocó conocimiento del asunto a debatir proveniente del Juzgado Primero Administrativo de Cali. En el mismo auto inadmitió la demanda y ordenó abrir cuaderno especial a la medida cautelar de urgencia (fl.227 c.1).

3.2. Una vez subsanada la demanda, la Secretaría ingresó el expediente al despacho el 05 de junio de 2019 (fl.230 c.1). En auto del 17 de junio de 2019 admitió la demanda.

3.3. Como se trata de una medida cautelar de urgencia, no se agotó el trámite previsto en el artículo 233 del CPACA.

II. CONSIDERACIONES

4. Asunto a resolver

² Folios 1 a 5 del cuaderno 2.

4.1. El Despacho deberá determinar si resulta procedente decretar la suspensión provisional de los actos administrativos (fallos disciplinarios de primera y segunda instancia y resolución que ejecutó la sanción) que destituyeron e inhabilitaron al señor José Wilmar Gómez Franco, en el cargo que venía desempeñando como Intendente de la Policía Nacional.

5. Solución al caso

5.1. Sobre la suspensión provisional

5.1.1. La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo es una medida cautelar que no es nueva para el ordenamiento jurídico nacional, pues en el Decreto 01 de 1984 se reguló. Sin embargo, su utilización era casi nula, porque el CCA exigía en su artículo 152 que la infracción a la norma superior fuera *manifiesta*. Lo que implicó que los jueces se abstuvieran de decretar la medida, porque podía conllevar a un prejuzgamiento y diferían el estudio al fallo.

5.1.2. Por ello, la Ley 1437 de 2011 trajo un cambio cualitativo respecto a la procedencia de la medida, excluyó el adjetivo *manifiesto*, por lo que se redujo la exigencia respecto al ordenamiento anterior, determinó que se puede confrontar el acto demandado con la norma superior infringida y advertir la contrariedad entre ambas, además del análisis probatorio.

5.1.3. En ese sentido, el Consejo de Estado emitió el auto del 17 de marzo de 2017 dentro del expediente tramitado bajo el radicado 11001-03-15-000-2014-03799-00³, en el que explicó el alcance del mencionado requisito de la siguiente forma:

<<La contradicción y el análisis entre las normas invocadas y el acto administrativo exige, entonces, que luego de un estudio de legalidad inicial, juicioso y serio, se pueda arribar a la conclusión de que el acto contradice la norma superior invocada, exigiendo, se insiste, la rigurosidad del juez en su estudio, con fundamento en el acto o las pruebas allegadas con la solicitud.

(...)

Aunado a lo anterior, el inciso primero del artículo 231(sic) CPACA le impone al interesado la carga de acreditar sumariamente la existencia de perjuicios, cuando quiera que solicite el restablecimiento del derecho e indemnización de los citados perjuicios, exigencia que no implica otra cosa que demostrar ante el operador judicial que resolverá su caso que la tardanza del proceso podría configurar un perjuicio>>.

³ Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez

5.1.4. Es decir, la carga respecto a la confrontación del acto demandado con la norma violada es de carácter argumentativo, y si bien debe ser un proceso riguroso, no exige una veracidad absoluta, lo que sí es indudable es la necesidad de que exista la apariencia de buen derecho deducido de la demanda o de las pruebas aportadas.

5.1.5. Por lo mismo, cuando el ejercicio realizado para la decisión respecto a la medida comporta un análisis muy profundo, en el que se deben establecer criterio jurídicos fuertes, una vocación de prosperidad de la demanda que, conforme con el Consejo de Estado corresponde a un análisis previo pero con sustentación que haga previsible que se debe acceder a las pretensiones y así no denegar la medida o se deba postergar hasta el fallo de fondo, porque si la etapa en la que se examina es incipiente como para hacer un juicio de valor que implique razonabilidad de la orden de suspensión⁴, o que por las pruebas que respaldan el caso se advierta esa vocación de éxito por los cuestionamientos de legalidad.

5.2. Caso concreto

5.2.1. Como la jurisprudencia ha resaltado, se trata de *"una reforma sustancial, si se tiene en cuenta que (...) habilita al Juez a realizar un estudio no simplemente superficial de la solicitud de la medida sino que incluye la apreciación de las pruebas aportadas al efecto"*⁵. Esto, por cuanto en el marco de la nueva normatividad establecida en el CPACA, para la suspensión provisional se prescindió de la *"manifiesta infracción"* hasta allí vigente, lo cual se ha interpretado en el sentido que *"la nueva normativa presenta una variación significativa en la regulación de esta figura, por cuanto la norma obliga al Juez administrativo a realizar el análisis entre el*

⁴ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 27 de julio de 2017, rad: 11-001-03-25-000-2012-00582-00, C.P. William Hernández Gómez. En el que indicó: "Por los argumentos esbozados, es necesario realizar un análisis de fondo sobre la legalidad del artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, el cual de hecho, constituye el objeto del presente asunto, lo que implica agotar las etapas del proceso y, el estudio respectivo en la sentencia; no en una etapa preliminar como la que ocupa al Despacho (...).

No es procedente la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado porque no es posible concluir en esta etapa incipiente del proceso, la violación de las normas invocadas con la confrontación del art. 43 del Decreto 4433 de 2004".

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 31 de julio de 2013, Rad. No. 110010324000 2013 00018 00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.

*acto y las normas invocadas como transgredidas y a estudiar las pruebas allegadas con la solicitud"*⁶.

5.2.2. En este sentido se observa que, para decretar la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo resulta necesario que del análisis realizado por el Juez, se concluya que existe violación a las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud.

5.2.3. Al respecto, el Despacho estima pertinente valorar el contenido de la demanda que generó el acto que se demanda en nulidad, a fin de verificar las normas que el actor afirma infringidas, las cuales se sustenta en los artículos 29 de la Constitución Política, 19, 20, 21 del Código Disciplinario Único. También adujo que es necesario el decreto de la suspensión provisional a fin evitar un perjuicio irremediable, en la medida que transgrede el mínimo vital, la dignidad humana y la seguridad social.

5.2.4. En efecto, se cuestiona que la decisión disciplinaria no tenía suficiencia probatoria como para arribar a la sanción impuesta al demandante, aspecto que demanda una mayor comprensión del caso, un análisis de cada prueba puesto que es lo que se cuestiona, asunto que no da la convicción a este juez de encontrar que se profirió una medida arbitraria, vulnerando el debido proceso en forma que se note en este momento del proceso, por el contrario lo revisado no da para asumir en este momento procesal un posible desconocimiento de la legalidad presunta, que se desvirtúe en principio la legalidad de los actos administrativos en los que se sancionó, con las bases probatorias de la causal de retiro del servicio.

5.2.5. En tal contexto, el Despacho llega a la conclusión que de la comparación normativa inicial no resulta la violación que aduce el actor, pues se debe analizar, con el debido detenimiento y rigor, el fundamento legal en que se basó la causal de retiro del servicio, así como la motivación del acto razonada en las decisión proferida por vía administrativa de primera y segunda instancia que sancionó al actor con una destitución e inhabilidad por el término de 10 años, por infracción del numeral 4 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006⁷.

5.2.6. Así mismo, se observa que dentro del proceso disciplinario DIPON-2016-145 el actor actuó a través de un profesional del derecho (fl.44), tuvo la

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 3 de diciembre de 2012, Rad. No. 11001-03-24-000-2012-00290-00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.

⁷ **"FALTAS GRAVÍSIMAS.** Son faltas gravísimas las siguientes: (...)

4. Solicitar o recibir directa o indirectamente dádivas o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, con el fin de ejecutar, omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones".

oportunidad de pedir pruebas, excepcionar, recurrir, es decir, ejerció el derecho de defensa y contradicción.

5.2.7. Por lo tanto de la confrontación de los actos administrativos y la normatividad que se adujo como violada, para establecer requisitos, con lo adelantado en el proceso, en esta etapa procesal, no se deduce la anunciada contradicción entre ellos, lo que es necesario para acceder a la medida de suspensión provisional de la decisión administrativa.

5.2.8. La destitución e inhabilidad del servicio activo al actor, compromete un análisis más profundo que no es propio de este momento procesal, es menester escudriñar en las causales de nulidad aducidas por el actor, la intención del legislador y la jurisprudencia que al respecto se haya proferido, análisis que no es procedente ahora.

5.2.9. Por otra parte, el actor no demostró que en el CPACA este prevista la afectación inminente a los derechos fundamentales como instrumento procesal que viabilice la medida cautelar, menos acreditó las circunstancias de la imposibilidad de la obtención de otro empleo y la condición de padre cabeza de familia, por lo que no acreditó el perjuicio irremediable ni la procedencia jurídica.

5.2.10. En principio la vulneración que aduce el actor no ha sido advertida en este momento al confrontar lo que prevé el artículo 231 del CPACA, por lo que deviene en improcedente la medida provisional solicitada, en vista de que no se observan los requisitos exigidos por la norma para que fuera posible decretar la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativo demandados. En consecuencia, la suspensión provisional deprecada por el actor será denegada.

En mérito de los expuesto, el **Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda,**

RESUELVE

DENEGAR la solicitud de suspensión provisional interpuesta por la parte demandante respecto los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia del 21 de junio de 2017 y 16 de mayo de 2018 respectivamente, y la Resolución 2891 del 06 de junio de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Juez

Y A H L

JUZGADO 9° ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.,
SECCIÓN SEGUNDA

NOTIFICACION POR ESTADO

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.


Sara Cristina Villota Escandón
Secretaria

